



FC Juzgado WJ

Fecha de emisión de notificación: 07/octubre/2024

Sr/a: LUIS MARCELO NUÑEZ

Domicilio: 20208930363

Tipo de domicilio

Electrónico

Carácter: Sin Asignación

Observaciones especiales: Sin Asignación

Copias: N

Tribunal: JUZGADO FEDERAL DE RAWSON N° 1 - sito en

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. **1345 / 2021** caratulado: **GENNEIA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN s/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO** en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: BERNARDO SIMON AISPURU, SECRETARIO DE JUZGADO



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE RAWSON N° 1

1345/2021

GENNEIA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN s/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO

Rawson (Chubut), octubre de 2024.-

VISTOS:

Estos autos, caratulados “GENNEIA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN s/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO” (FCR 1345/2021), que vienen a despacho para dictar sentencia, y de los cuales,

RESULTA:

I. Que a fs. 1/58 se presenta el Dr. Luis Marcelo NÚÑEZ en representación de Genneia S.A. promoviendo acción meramente declarativa de derecho en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Municipalidad de Puerto Madryn, a fin que se declare la ilegitimidad de la pretensión fiscal de gravar con la “Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental”, los parques eólicos que detenta su representada, ubicados en el Km. 13 de la Ruta Provincial N° 4 (“Puerto Madryn I” y “Puerto Madryn II”) y en el Km. 1375 de la Ruta Nacional N° 3 (“Chubut Norte II”) (v. Ap. II).

Primero alude a los antecedentes del caso (v. Ap. III). En dicho marco, dice ante todo que en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, los ingresos obtenidos por la Sociedad en la Provincia derivaron de su actividad de generación eólica, térmica y algunos servicios empresariales. Que en los años 2018 y 2019, la presencia en Puerto Madryn se limitó al alquiler de un departamento. Que, conforme surge de la habilitación municipal oportunamente otorgada por el Municipio, se trata de una oficina típicamente administrativa. Que esta oficina consta de 123 mts², y contó con: (i) 1 empleado en el año 2018, (ii) 3 empleados en el año 2019, y (iii) 5 empleados en la actualidad. Que la Sociedad habilitó esta oficina y cumplió regularmente con el pago de la Tasa, reconociendo que esa oficina es objeto de las típicas funciones de inspección municipales. Que de este modo la Sociedad siempre aclaró que el pago de la Tasa correspondiente a la oficina no implicaba el reconocimiento de jurisdicción ni potestades tributarias con relación a la actividad realizada en los parques eólicos. Que respecto a la ubicación de los Parques Eólicos, recuerda que el 21/11/2019, la Legislatura de la Provincia del Chubut sancionó la Ley N° XVI N° 101, a través de la cual amplió la jurisdicción territorial de la Ciudad de Puerto Madryn, conforme el alcance definido en el artículo 1° de dicha Ley. Que en virtud de la ampliación del ejido municipal, a partir de la entrada en vigencia a fines de 2019 de la Ley N° XVI N° 101, los Parques Eólicos, quedaron comprendidos en la jurisdicción territorial del Municipio. Y que, por lo tanto, en los años 2018 y 2019 la Sociedad no tuvo ningún parque eólico dentro del ejido municipal, sino que sólo tenía la mencionada oficina administrativa, y que, no obstante ello, el Municipio reclama en esos períodos una Tasa de \$ 70.981.913,93.

Continúa diciendo que en el marco de la licitación ejecutada por el gobierno nacional en el año 2016, mediante la Resolución N° 202-E/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, la Sociedad desde los años 2018 y 2019, cuenta con la habilitación comercial del Parque Eólico Madryn I y II, y desde agosto de 2018, inició las obras correspondientes al Parque Eólico Chubut Norte II. Que a fin de poder iniciar y concluir las respectivas etapas de construcción de los Parques Eólicos, la Sociedad debió tramitar y obtener los



#35354528#430048952#20241007095321332

distintos permisos y habilitaciones ante las autoridades competentes, las cuales no sólo otorgaron los respectivos permisos y habilitaciones, sino que siguen ejerciendo controles periódicos durante las etapas de construcción y operación comercial de los Parques Eólicos. Que a partir de la ampliación del ejido, el Municipio comenzó a realizar distintos pedidos de información relacionados con la actividad ejercida por la Sociedad en los Parques Eólicos. Y que la Sociedad cumplió con esos pedidos de información del Municipio, expresamente bajo protesto, rechazando que el Municipio tuviera potestad alguna en materia de inspección, seguridad, higiene y control ambiental, sobre la actividad y las instalaciones eléctricas constitutivas de los Parques Eólicos. Y que, posteriormente, el Municipio avanzó con distintas intimaciones dirigidas a la Sociedad, a fin de que regularizara su situación con relación a la Tasa, determinando la misma de oficio y exigiéndole su pago bajo apercibimiento de ejecución.

En apartados subsiguientes alude a la procedencia formal de la vía (v. Ap. IV), a la competencia (v. Ap. V), funda en derecho la pretensión (v. Ap. VI), solicita el dictado de una medida cautelar (v. Ap. VII), ofrece prueba (v. Ap. VIII), formula reserva del caso federal (v. Ap. IX), confiere autorizaciones (v. AP. X), y culmina con el petitorio de estilo (v. Ap. XI).

II. Que a fs. 1145/1149 el Sr. Fiscal Federal se expide a favor de la competencia del Tribunal, la admisibilidad formal de la vía, y -eventualmente- de la medida cautelar.

III. Que a fs. 1151 se declara la competencia de este Juzgado Federal y la admisibilidad formal de la acción deducida, ordenándose el traslado de la demanda. También se rechaza la medida cautelar solicitada.

IV. Que a fs. 1207/1211 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia concede la medida cautelar antes referida, “ordenando a la Municipalidad de Puerto Madryn la suspensión de todos los efectos derivados de la “Tasa municipal por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental”, absteniéndose de trabar medidas compulsivas de cobro y de aplicar otras penalidades administrativas por falta de pago, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes”, todo conforme argumentos a los que corresponde remitirse brevitatis causae.

V. Que a fs. 1392/1420 se presenta la Municipalidad de Puerto Madryn por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Julieta SENA, contestando la demanda.

Primero, niega los hechos que relata la actora (v. Ap. III.A) y brinda su versión (v. Ap. III.B). Dice al respecto que el 21 de noviembre de 2019 se amplió la jurisdicción territorial de la ciudad de Puerto Madryn, y que los Parques Eólicos Puerto Madryn I, Puerto Madryn II, y Chubut Norte II se encuentran dentro del ejido municipal. Que si bien es cierto que la iniciación de la actividad de los parques es anterior, también lo es el hecho que los mismos, por ley, se encuentran dentro del ejido municipal, y por lo tanto sujetos a las atribuciones propias del municipio. Que una cuestión es el órgano competente para “autorizar” la actividad de los Parques por las particularidades de la actividad, y otra cuestión es la aplicación de la normativa local en igualdad de condiciones respecto de cualquier actividad comercial que se realice dentro del ejido. Que, en relación a la materia, la Carta Orgánica Municipal preceptúa en su art. 26 que las competencias Municipales son ejercidas con plena autonomía y con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad, y que se clasifican en: 1) competencias exclusivas; 2) competencias compartidas; y 3) competencias delegadas. Que estas últimas están establecidas en el art. 233 de la Constitución Provincial. Que, por su parte, el art. 194 de la Carta Orgánica establece que el





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE RAWSON N° 1

Municipio tiene la facultad impositiva, tanto sobre la riqueza como sobre los recursos que se generen en su ámbito, que ejerce con el sólo límite de la territorialidad; y que es indelegable la competencia tributaria que constitucionalmente le corresponde en forma exclusiva. Que tampoco se considera desgravada o eximida de pago, ninguna obligación tributaria de competencia municipal, que recaiga sobre entes nacionales o provinciales, sin una Ordenanza dictada al efecto.

De este modo, continúa diciendo, el Estado Municipal, en ejercicio pleno y desarrollo de la autonomía que la Constitución Provincial consagra, procura la armonización con el régimen impositivo provincial y federal, sin vulnerar la autonomía municipal. Que el art. 198 del mentado plexo normativo determina qué constituyen recursos propios, además de los que explícitamente enumera la Constitución Provincial, y cita: 1) La recaudación en ejercicio de las facultades tributarias que le son propias de impuestos, tasas, contribuciones, derechos, aranceles, licencias, patentes, rentas y todo otro gravamen que se imponga a la población. Que, en el mismo sentido, la procedencia de la tasa en cuestión, halla asidero en lo dispuesto por el art. 200 de la Carta Orgánica Municipal, el cual transcribe, de donde surge la causa de la obligación.

Luego, alude a las respectivas competencias del ENRE y de la Municipalidad, así como a las actuaciones administrativas labradas a consecuencia de la tasa que se cuestiona en este marco procesal, a todo lo cual corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Funda en derecho su posición con expresa referencia a aspectos normativos y a las facultades y competencias municipales, a la prestación del servicio en cuestión, y a la diferenciación entre la procedencia de la tasa y la base imponible, señalando que la actora trasladó el costo de la tasa a CAMMESA, no verificándose ningún daño en ese sentido (v. Ap. IV, V y VI).

En apartados subsiguientes alude a modo de conclusión que la aplicación de la tasa obedece a una potestad constitucional de la Municipalidad que representa, la cual tiene facultades para ejercer el poder de policía dentro del ejido municipal, no habiendo ninguna ley que lo impida, solicitando que se declare su constitucionalidad, su efectiva vigencia, con los alcances previstos, y su inmediata aplicación, a fin de que cese el estado de incertidumbre planteado por la actora (v. Ap. VII y VIII).

Finalmente ofrece prueba (v. Ap. IX), y culmina con el petitorio de estilo solicitando el rechazo de la demanda (v. Ap. X).

VI. Que a fs. 1574 se recibe la causa a prueba y a fs. 1986 pasa a despacho para sentenciar.

Y CONSIDERANDO:

I. Que la acción meramente declarativa (receptada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) requiere para su procedencia que exista un estado de incertidumbre, es decir, falta de certeza sobre el derecho aplicable a una determinada relación jurídica; una controversia real, y no meramente conjetural; así como de un interés jurídico suficiente en el/la accionante, precisamente por esa falta de certeza; y la inexistencia de otro medio legal para poner fin a ese estado de incertidumbre (Roland Arazi y Jorge A. Rojas, CPCCCN, Comentado,..., Tomo II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 72).

De los términos de la demanda y su contestación surge con claridad la existencia de un estado de incertidumbre sobre una relación jurídica específica, real y no conjetural, en tanto se cuestiona la aplicación de un gravamen. Por otra



parte, el interés de la sociedad accionante se encuentra claramente definido a la luz de los derechos y garantías que presenta como conculcados, y de una actividad explícita por parte de la demandada dirigida a la percepción de aquél, y no se advierte otra alternativa para articular la pretensión.

Por lo tanto, siendo que la acción promovida resulta idónea para dirimir la cuestión debatida, corresponde pasar a precisar el régimen legal aplicable.

II. Que previo al análisis de la presente cuestión, cabe recordar que “la tasa es la categoría tributaria que más problemas ha suscitado en la doctrina y en la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera” (Krivocapich, Germán, Manual de Finanzas Publicas y Derecho Tributario, Thomson Reuters La Ley, año 2021, 1ra ed., pág. 142).

Dicho ello, cabe señalar que la Ley de Energía Eléctrica, N° 15.336, establece que quedan sujetas a sus disposiciones y las de su reglamentación, las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional, para luego declarar que es de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica cuando -en lo que aquí concierne- “...b) Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o más provincias o una provincia con otra o con el territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur; (...) e) En cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión;...”. También, que el gobierno federal puede utilizar y reglar las fuentes de energía, en cualquier lugar del país, en la medida requerida para los fines a su cargo, y que, en el ámbito de la jurisdicción nacional, y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional otorga las concesiones y ejerce las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional. Y que “Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprende en esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local.”

Por su parte, la Ley N° 26.190 (“Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Objeto. Alcance. Ámbito de aplicación. Autoridad de aplicación. Políticas. Régimen de inversiones. Beneficiarios. Beneficios. Sanciones. Fondo Fiduciario de Energías Renovables.”) declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio público, como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad, estableciendo como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, y, a tal efecto, promueve -mediante diversas medidas- la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio nacional, como la eólica.

Y la Ley N° 27.191 introduce modificaciones a la Ley N° 26.190 y adopta regulaciones sobre cuestiones no previstas. Este régimen tiene como objeto el fomento del uso de fuentes renovables de energía destinadas a la Producción de Energía Eléctrica. Ello así pues, tal como surge de las consideraciones de su decreto reglamentario (N° 531/2016), la expansión del uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica -como finalidad principal del Régimen de Fomento- tiene consecuencias favorables para el país ya que implica una mayor diversificación de la matriz





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE RAWSON N° 1

energética nacional, la expansión de la potencia instalada en plazos cortos, la reducción de costos de generación de energía, previsibilidad de precios a mediano y largo plazo, y la contribución a la mitigación del cambio climático, generando condiciones para la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica para la República Argentina. Por las razones antedichas, la expansión del uso de las fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica, constituye una cuestión de máxima prioridad para el Poder Ejecutivo Nacional y una política de Estado de largo plazo con aptitud para asegurar los beneficios de energías limpias para el país y para todos sus habitantes. En ese marco, el art. 17 de la Ley N° 27.191 ha establecido una exención tributaria de carácter temporaria para el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el art. 4 de la Ley N° 26.190, entre la que se encuentra la eólica aquí referida (la Provincia del Chubut se encuentra adherida al citado régimen por Ley XVII-134, de fecha 09/06/2016). Textualmente dice: “El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la ley 26.190, modificado por la presente ley, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025.”

Que la cuestión que se ventila se inscribe entonces en un marco de regulación federal, y en este contexto debe resolverse si la pretensión impositiva municipal pone en crisis a ese régimen, no sin aclarar, tal como se dijera en oportunidad de resolver en esta instancia la medida cautelar, que la Ley N° 15.336 no consagra una inmunidad impositiva absoluta (v. art. 12).

Por otra parte se impone señalar que la accionante gestionó y obtuvo oportunamente la aprobación de estudios de impacto ambiental, además de aquellos expedidos por las autoridades nacionales competentes en materia energética. En suma, la Subsecretaría de Energía Eléctrica habilitó el ingreso de los Parques al MEM, para lo cual debió cumplir, previamente, con toda la normativa técnica y en materia ambiental, quedando luego sujeto al control del ENRE, organismo que emitió todas las autorizaciones posteriores que permiten el funcionamiento de los Parques, en una tarea de contralor técnica específica, que se financia -entre otros recursos- con la “tasa de inspección y control” que creó el art. 67 de la Ley N° 24.065.

Al respecto, cabe remarcar que el art. 20 de la Ley N° 24.065 establece que “los generadores, transportistas y distribuidores abonarán una tasa de inspección y control que será fijada por el ente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 y 68 de la presente ley”. El art. 66 dispone por su parte que “Los recursos del ente se formarán con los siguientes ingresos: a) La tasa de inspección y control que se crea por el artículo siguiente...”, y el art. 67 que “los productores, transportistas y distribuidores abonarán anualmente, y por adelantado una tasa de fiscalización y control a ser fijada por el ente en su presupuesto...”. Esta tasa es determinada por el ENRE y deben abonarla -entre otros- los productores de energía, según los gastos e inversiones previstos en su presupuesto para cada año, lo cual demuestra que el organismo federal que dicta y controla el cumplimiento de los reglamentos en materia de seguridad y procedimientos técnicos, y que vela por la protección de la seguridad pública y el medio ambiente en la construcción y operación de los Parques Eólicos, reviste carácter nacional.

De todo lo expuesto es posible concluir que toda la actividad relacionada a la generación, transporte y distribución de energía se encuentra bajo la órbita de control del ENRE, y que por tal actividad se abona la tasa de inspección y control prevista en la Ley N° 24.065, con lo que el pago que el Municipio de Puerto Madryn persigue en este caso, al no haber cumplimentado la carga legal de



acreditar la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio que la tasa retribuiría (que según dice, retribuye “un servicio de inspección destinado a preservar y garantizar la seguridad y la salubridad” - v. fs. 1392/1420, pág. 16), comporta una “doble imposición” violatoria de la Ley N° 23.548, que se da cuando el mismo destinatario legal tributario es gravado dos o más veces por el mismo hecho imponible, en el mismo período de tiempo y por dos o más sujetos con poder tributario.

Que sentado ello, abrigan otros argumentos que me inclinan por atender la postura de la accionante, puesto que el tributo discutido en autos en su especie “Tasa” no se comportaría como tal.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en reiteradas oportunidades que la tasa constituye una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien tiene una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de este por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general (Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503, entre otros).

Asimismo, ha señalado que dicha distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que desempeña un rol esencial en la coordinación de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, pues el art. 9, inc. b, de la Ley N° 23.548, de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos (Fallos: 332:1503).

También que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 329:792, entre otros), y que la prueba de este extremo corresponde al Municipio. Esto no quiere significar que el Fisco deba acreditar la prestación del servicio como condición para poder reclamar el importe de la tasa, sino que, si frente a un reclamo, el sujeto requerido alega la improcedencia de aquel por falta de prestación del servicio (como en el caso), la acreditación de este extremo ha de quedar a cargo de la Administración y la consecuencia de su falta de acreditación ha de ser la improcedencia del reclamo (Conf. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en “Edenor S.A. c. Municipalidad de La Matanza s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, resol. del 14/08/2020, La Ley online: LALEY AR/JUR/33937/2020).

Que la efectiva acreditación del servicio resulta entonces fundamental a los efectos de resolver la controversia, pues el régimen citado (más concretamente el art. 12 de la Ley N° 15.336), consagra que “...Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación...”, a sola excepción de “...tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local...”.

Que, así, y en palabras de la propia CSJN, “...la contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son estos servicios los que permiten a las municipalidades





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE RAWSON N° 1

gravar a los contribuyentes que se benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional...” (Fallos 344:2728, Consid. 8°).

Que según el art. 173 del Código Tributario Municipal, la tasa de la que se trata, retribuye “los servicios municipales de inscripción, habilitación, inspección, contralor, salubridad, seguridad e higiene y control ambiental, que tiendan al bienestar general de la población ... aun cuando el ejercicio de la actividad comercial, industrial, profesional o de servicio no requiera de un establecimiento habilitado”.

En virtud de los términos sumamente amplios de la tasa frente a la individualización del servicio, es que -en este caso- la obligación a cargo de la demandada en torno a la demostración de la efectiva prestación del mismo, se acrecienta.

En tal sentido la CSJN ha dicho que “...la excesiva latitud en la determinación de los servicios que las tasas pretenden retribuir al no discriminar debidamente los servicios cuya manutención solicita contrarían el principio de legalidad tributaria, pues posibilitan “la eventual recaudación de los fondos para una finalidad ajena a la que presuntamente le habría dado origen”. Es por ese motivo que, ante normas que realizan la descripción del hecho imponible en términos excesivamente amplios se acrecienta la obligación de demostrar la efectiva prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado...” (Fallos 344:2728, Consid. 8°).

Que, en este contexto, y a la luz de los elementos acompañados, no se advierte que el servicio relacionado con la tasa haya sido efectivamente prestado por la demandada, no habiendo ésta demostrado su acaecimiento pese a tenerlo a cargo y encontrarse a su vez en inmejorable posición de hacerlo.

Es que “tradicionalmente, incumbe la carga de la prueba a quien alega el hecho controvertido del que se trata. No obstante, la teoría dinámica en este asunto impone que quien esté en mejores condiciones probatorias sea el obligado a producirla..., en “Llobet de Delfino, María T. c. Provincia de Córdoba” y también en “Quilpe S.A. s/ inconstitucionalidad” (9/10/2012), la Corte Suprema ha afirmado que corresponde al Fisco reclamante la prueba acerca de la efectividad de los servicios invocados (CS, 26/11/1969, LL 139-238, y JA 5 -1974, pág. 565)” (Cf. VILLEGAS, Héctor Belisario – Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 127, Ed. 2021, Ed. Thomson Reuters La Ley).

Es decir, la demandada no ha cumplimentado con la carga legal de acreditar la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio que la tasa retribuiría (que según dice, retribuye “un servicio de inspección destinado a preservar y garantizar la seguridad y la salubridad” - v. fs. 762/791, pág. 16). Pues “esto fue manifestado en diferentes causas entre las que se encuentran “Compañía Química SA c. Municipalidad de Tucumán” (CS, 03/09/1989) y más recientemente “Laboratorios Raffo c. Municipalidad de Córdoba” (CS, 26/06/2009)” (Krivocapich, Germán, Manual de Finanzas Publicas y Derecho Tributario, 1ra edición, pág. 143, Ed Thomson Reuters La Ley, año 2021).

La genérica invocación a la prestación de un servicio a favor de la contribuyente no resulta suficiente para tener por acreditada, conforme la regla anteriormente expuesta, la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio que la tasa retribuiría (art. 377 del CPCCN).

Que, en consecuencia, corresponderá hacer lugar a la demanda que Genneia S.A. presenta contra la Municipalidad de Puerto Madryn, declarando la ilegitimidad de la pretensión fiscal de gravar con la “Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental”, los parques eólicos que



detenta, ubicados en el Km. 13 de la Ruta Provincial N° 4 (“Puerto Madryn I” y “Puerto Madryn II”) y en el Km. 1375 de la Ruta Nacional N° 3 (“Chubut Norte II”) (v. Ap. II).

III. Que, no existiendo motivos para apartarse del principio objetivo que sienta el art. 68 del CPCCN, corresponde imponer las costas a la demandada perdidosa.

Por ello, en virtud de las citas legales efectuadas, doctrina, y jurisprudencia, se

FALLA:

I. Haciendo lugar a la demanda que Genneia S.A. presenta contra la Municipalidad de Puerto Madryn, declarando la ilegitimidad de la pretensión fiscal de gravar con la “Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental”, los parques eólicos que detenta, ubicados en el Km. 13 de la Ruta Provincial N° 4 (“Puerto Madryn I” y “Puerto Madryn II”) y en el Km. 1375 de la Ruta Nacional N° 3 (“Chubut Norte II”).

II. Imponer las costas a la demandada vencida (Consid. III), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera: al Dr. Luis Marcelo NUÑEZ, en su carácter de letrado apoderado de la actora gananciosa, en \$ 1.215.580,00, suma equivalente a 20 UMAs; y al perito Gustavo Eduardo ARANCIAGA en \$ 425.453,00, suma equivalente a 7 UMAs (arts. 14, 16, 19, 21, 32, 61, y cctes. de la Ley N° 27.423, y Resolución SGA N° 2375/2024); en ambos casos con más IVA si correspondiere; sin regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada en razón de cómo se imponen las costas y lo normado por el art. 2 de la Ley N° 27.423.

III. Regístrese y notifíquese, por Secretaría.-

HUGO RICARDO SASTRE
JUEZ FEDERAL

En misma fecha se notifica la sentencia definitiva que antecede, y se registra la misma en el Libro Único de sentencias del sistema de gestión integral de expedientes judiciales Lex-100, conforme Ac. N° 6/2014 de la CSJN. CONSTE.-

BERNARDO AISPURU
SECRETARIO

